

Bragado acusa al fiscal de querer juzgar "25 años de urbanismo"

VIENE DE LA PÁGINA 1

La fiscalía, añadió el abogado, solo pretendió cebarse "en Millet y Montull, Ali Babá y El Lute, los apestados de la sociedad, aquellos contra los que todo vale". Las llamadas que ambos hicieron a los responsables municipales no son, en su opinión, un delito de tráfico de influencias.

El abogado de Millet, Abraham Castro, ahondó más en aspectos jurídicos. Según la fiscalía, Millet y Montull colaboraron 900.000 euros de comisión al promotor del hotel, Manuel Valderrama, para asegurarse la adjudicación del proyecto. El abogado insistió que se trata de una "simple conjetura" y negó que Millet se haya lucrado. "Lo único que falta es que le imputen presiones por telepatía", lamentó Castro.

Además de más de diez años de cárcel para Millet y Montull, el fiscal pide casi cinco para la excúpula de Urbanismo de Barcelona: el exteniente de alcalde Ramon Garcia-Bragado; el exgerente Ramon Massagué y el exdirector jurídico Enric Lambies. Tras los informes de los abogados, solo Garcia-Bragado hizo uso de su derecho a la última palabra.

Lo que se ha pretendido juzgar en la causa del hotel, denunció Garcia-Bragado, "es la práctica urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona durante los últimos 25 años". El ex edil defendió su "absoluta inocencia": "Jamás he cedido ante coacción alguna, he obrado desde la más absoluta rectitud y respeto a la legalidad". El caso quedó visto para sentencia.



El parque temático PortAventura y los terrenos colindantes que ocupará BCN World. / JOSEP LLUÍS SELLART

ICV y CUP llevan al Consejo de Garantías el pacto de BCN World

Los partidos denuncian la fiscalidad y el urbanismo de la ley

MERCÉ PÉREZ / DANI CORDERO
Tarragona / Barcelona

ICV-EUIA y la CUP, los partidos más refractarios con el proyecto de casinos y hoteles de BCN World, impugnarán mañana viernes ante el Consejo de Garantías Estatutarias el acuerdo con el que CiU y PSC desencallaron el trámite parlamentario del futuro macrocomplejo que Veremonte prevé levantar en Vila-seca y Salou, junto al parque temático de PortAventura. Ambos partidos elaboraban ayer un documento conjunto con los argumentos con los que pretenden frenar la Ley de Centros Recreativos y Turísticos que está previsto aprobar previsiblemente el próximo 24 de abril.

El diputado de CUP Quim Arrufat desveló ayer las intenciones de impugnar algunos artícu-

los de la ley, básicamente los que hacen referencia al "principio de interés general", que Arrufat cree que "se vulnera de principio a fin", y también en lo referente al principio de autonomía local. Fuentes del grupo ecosocialista señalaron que hay diferentes artículos que podrían no pasar el tamiz del Consejo de Garantías en materias como los derechos de la infancia (si el centro de juego es visible), la fiscalidad, el urbanismo o la vulneración de las competencias municipales.

Es la última bala que le queda para frenar el proyecto a los dos grupos que, junto a ERC, votaron en contra de la modificación de la ley. Una vez superada la aprobación en la cámara, el Gobierno catalán podrá iniciar el diseño y la redacción del plan urbanístico para su consenso y Veremonte po-

drá iniciar a construir el complejo, con el objetivo de estrenar los dos primeros resorts en 2017.

La Asamblea Aturem BCN World ha convocado una manifestación el próximo 31 de mayo, que recorrerá las calles de Salou bajo el lema *No juguemos al juego de BCN World*. El movimiento iniciará en los próximos días una campaña para concienciar a los ciudadanos sobre "los riesgos vinculados al proyecto" impulsado por el empresario Enrique Bañuelos. La campaña incidirá en el posible "incremento de las adiciones al juego, las rebajas fiscales al sector de los casinos, el cambio de turismo familiar vinculado al territorio, y la gestión poco transparente y exenta de procedimientos democráticos que ha sufrido el proceso parlamentario para modificar la legislación a favor".

Unos 5.000 'sin techo' fueron atendidos en centros sociales en 2012

JESSICA MOUZO, Barcelona

La crisis y las dificultades para acceder a una vivienda han dibujado un paisaje con albergues a rebosar. Así lo denunció ayer la Mesa del Tercer Sector en el informe *Crisis, empobrecimiento y gente sin hogar*. "El cojín familiar para resistir la crisis se ha erosionado notablemente. La familia y las redes de relación social de proximidad han perdido buena parte de su capacidad de reacción solidaria", explicaron las entidades. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas por el Tercer Sector, 4.888 indigentes fueron asistidos en centros de atención a gente sin hogar en Cataluña en 2012. Solo en Barcelona, la Red de Atención a personas sin hogar de Barcelona (XAPS-LL, en sus siglas en catalán), ha certificado que el número de gente sin techo se ha incrementado un 42% desde 2008.

En el informe, elaborado por el politólogo Albert Sales, las entidades denuncian "la falta de estudios que permitan conocer la dimensión real del problema para planificar respuestas adecuadas". La Mesa del Tercer Sector ha instado a las Administraciones a actuar desde un ámbito "supramunicipal" para ayudar a la gente sin hogar.

Un activista social magrebi, premio Príncipe de Girona

M. R., Girona

La Fundación Príncipe de Girona (FPdGi) ha premiado a Mohamed El Amrani por su personalidad ejemplar, su actitud de comunicación positiva, su carácter integrador, su trabajo de base comunitaria y su capacidad de encontrar pequeñas soluciones a grandes problemas. Este galardón, reconoce a jóvenes que por su liderazgo personal hayan impulsado proyectos de integración de grupos marginados o en riesgo de exclusión, tanto desde la iniciativa de entidades sociales como de empresas.

El Amrani (Marruecos, 1992) ha creado la Associació Xarxa de Convivència de Roses, dirigida a jóvenes en riesgo de exclusión o que formen parte de familias desestructuradas. Ha trabajado en medios de comunicación —el semanario *Empordà*, ha sido presentador-reportero en *Empordà Televisió*— y ha creado programas de divulgación juvenil sobre participación. Actualmente, es locutor en RNE 4 en un programa cuyo objetivo es descubrir jóvenes que lideren iniciativas sociales.

Expertos y entidades alertan que privatizar la sanidad atenta contra la equidad social

ANTÍA CASTEDO, Barcelona

El sistema sanitario catalán está sometido a una creciente privatización que atenta contra la equidad y no garantiza unos mejores servicios a los ciudadanos. Es una de las ideas que ayer compartieron expertos, profesionales y entidades sociales reunidos por Comisiones Obreras en una jornada celebrada en Barcelona. Los participantes en el encuentro alertaron de la existencia de un "ataque frontal" contra la sanidad pública y exigieron más transparencia y control de su funcionamiento.

"Con una sanidad pública hundida, nuestra sociedad difícilmente mantendrá los equilibrios sociales", alertó Àngels Martínez, portavoz de Dempeus. Pep Martí, del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), resumió las vías para el debilitamiento del

sistema público: las reorganizaciones y derivaciones aplicadas por la Generalitat; los cambios normativos y los recortes. "Los recortes aumentaron un 60% las listas de espera para las 14 intervenciones con un tiempo máximo garantizado", recordó Martí.

Las listas de espera son una forma de "disuadir" a los pacientes para que busquen atención privada, bien sea a través de la contratación de una mutua o pagando de forma directa por el servicio. "No hay quien aguante un año esperando una operación", resumió Josep Vallhonestà, portavoz de la Plataforma por el Derecho a la Salud.

Los participantes se refirieron a la Reordenación Asistencial Territorial (RAT) puesta en marcha por el Departamento de Salud. Una de las medidas que incluye es la derivación de actividad de

baja complejidad desde el hospital Clínic hacia el Sagrat Cor, propiedad de IDC Salud—antigua Capio—. Martí criticó que el recorte de 17 millones de euros en el presupuesto del hospital Clínic aplicado por la Generalitat al tiempo

"Las listas de espera disuaden a los pacientes para ir a la privada", critican

que se deriva actividad al Sagrat Cor supone la "privatización" de una parte del hospital público. Los expertos y profesionales criticaron también la apertura de una vía de atención privada en hospitales financiados por la Generalitat. Existe un peligro de que se

crea una "doble puerta" que rompa con la equidad del sistema.

"La sanidad es un pastel inmenso", alertó el ex *sindic de Greuges* y profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Agustí Colom, quien dijo que el "modelo catalán" se ha construido "sobre la confusión entre lo público y lo privado". La privatización sanitaria "tiene un componente importante de extracción de rentas", abundó. La autonomía de gestión se ha entendido como ausencia de "controles", "opacidad" y un uso discrecional de los excedentes. "La salud de la población, en global, no depende fundamentalmente de los servicios", dijo Carme Borrell, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp). Borrell apostó por la presión "desde abajo" para defender los servicios públicos.